

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI.
Oficina de Reparto
E.S.D

PROCESO: ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA

DTE: ARNULFO CRUZ Y OTROS

DDO: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICIA NACIONAL

APDO: LUIS ALFONSO CALDERON MENDOZA

RDO: FOLIOS:

FECHA:

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI.
Oficina de Reparto

REF.: Acción: Reparación Directa
 Demandantes: Arnulfo Cruz y Otros
 Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional

LUIS ALFONSO CALDERON MENDOZ mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía No. 11.301.880 expedida en Girardot Cundinamarca, con Tarjeta Profesional de Abogado No.147.609 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial; de ARNULFO CRUZ, CARMEN ELENA LARA DE CRUZ, SANDRA CANIZALES OLAVE, FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES; MILI YOBANA FANDIÑO TAFUR, TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO, MARIELA CRUZ LARA, GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA, DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO, LAURA SOFIA CRUZ BARRERO, SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, JOSE ARNULFO CRUZ LARA, LILIA LARA DE RIVERA, BLANCA LILIA RIVERA LARA, JAIDI RIVERA LARA, MARIA CRISTINA RIVERA LARA, CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO, IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO, CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO; de conformidad con los poderes conferidos, con residencia y vecindad en el municipio de Girardot (Cundinamarca), Bogotá D. C. y Palmira (Valle), acudimos ante esta jurisdicción para impetrar medio de control - demanda de Reparación Directa en contra de la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL**; para que por los medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con citación y audiencia de la parte demandada, del agente del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de los daños y perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación, por la muerte que le causó con el arma de fuego de dotación Oficial (Pistola Sig Sauer) al Subintendente FERNEY CRUZ LARA de la policía Nacional; el Intendente **GARCIA VALENCIA JORGE** de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en Octubre 31 de 2013, en el parqueadero de la estación de Policía de Media canoa, jurisdicción Municipio de Yotoco Valle Del cauca, el día seis (31) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), producto de la actuación irregular del miembro de la institución demandada.

OPRTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Con fundamento en el literal i del numeral 2° del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, me encuentro dentro del término de ley para instaurar esta demanda ordinaria de reparación directa, toda vez que el hecho generador de la misma aconteció el 31 de Octubre de 2013.

DESIGNACION DE LAS PARTES

1. LA PARTE DEMANDANTE. Está compuesta por:.

1.1. ARNULFO CRUZ, padre de la Víctima, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 17.134.906 de Bogotá D.C.

1.2. CARMEN ELENA LARA DE CRUZ madre de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 20.616.686 de Girardot Cundinamarca.

1.3. SANDRA CANIZALES OLAVE cónyuge de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 66.786.358 de Palmira Valle.

1,4. FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES Hijo de la Víctima, identificado con la tarjeta N°. 1.113.979.669, representado legalmente por su madre SANDRA CANIZALES OLAVE cónyuge de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°66.786.358 de Palmira Valle.

1,5. TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO Hija extramatrimonial de la Víctima identificada con la Tarjeta de identidad N°. 97051909350 de Girardot Cundinamarca, representada legalmente por su madre MILI YOBANA FANDIÑO TAFUR, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 39.574.204 de Girardot Cundinamarca.

1,6. MARIELA CRUZ LARA, hermana de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 39.564.334 de Girardot Cundinamarca.

1,7. GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA hermano de la Víctima, y representante legal de sus hijos menores DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO Y LAURA SOFIA CRUZ BARRERO sobrinos de la Víctima. Identificado con la cédula de ciudadanía N°. 11.318.550 de Girardot Cundinamarca.

1,8. DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO sobrino de la Víctima, menor de edad identificado con Tarjeta de identidad N°. 98090154761 de Girardot Cundinamarca.

1,9. LAURA SOFIA CRUZ BARRERO sobrino de la Víctima, menor de edad identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1072099614 de Girardot Cundinamarca.

1,10. SAIDA VIVIANA CRUZ LARA hermana de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 39.580.740 de Girardot Cundinamarca.

1,11. JOSE ARNULFO CRUZ LARA hermano de la Víctima, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 11.314.657 de Girardot Cundinamarca.

1,12. CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO sobrino de la Víctima, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.019.066.439 de Bogotá D.C.

1,13. IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO, sobrino de la Víctima, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.019.105.808 de Bogotá D.C.

1,14. CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO sobrino de la Víctima, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.070.607.250 de Girardot Cundinamarca.

1,15. LILIA LARA DE RIVERA abuela de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 20.600.504 de Girardot Cundinamarca.

1,16. BLANCA LILIA RIVERA LARA tía de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 39.557. 392 de Girardot Cundinamarca.

1,17. JAIDI RIVERA LARA tía de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 39.559.389 de Girardot Cundinamarca.

1,18. MARIA CRISTINA RIVERA LARA tía de la Víctima, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 39.563.262 de Girardot Cundinamarca.

Apoderado de la parte demandante: El suscrito LUIS ALFONSO CALDERON MENDOZA, mayor de edad, vecino, domiciliado y residenciado en esta ciudad de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No 11'301.880 de Girardot Cundinamarca y Tarjeta Profesional 147.609 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional ubicado en la carrera 5 No. 12-16 Oficina 408 del Edificio Suramericana, teléfono fijo 397 56 44 – y móvil 310-400 25 37 de Cali Valle.

2- PARTE DEMANDADA. Lo es la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL**, representada legalmente por el señor Ministro de Defensa Doctor Juan Carlos Pinzón o por quien haga sus veces al momento de la notificación.

3- MINISTERIO PÚBLICO. Representado por el señor Procurador Judicial delegado ante esta Jurisdicción.

PRETENSIONES

PRIMERA: Que se declare patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de todos los perjuicios ocasionados a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, de todos los perjuicios ocasionados a ARNULFO CRUZ, CARMEN ELENA LARA DE CRUZ, SANDRA CANIZALES OLAVE, y Representante Legal del menor FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES, MILI YOBANA FANDIÑO TAFUR Representante Legal de la menor TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO, MARIELA CRUZ LARA, GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA en Representación Legal de sus hijos menores DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO Y LAURA SOFIA CRUZ BARRERO, SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, JOSE ARNULFO CRUZ LARA, LILIA LARA DE RIVERA, BLANCA LILIA RIVERA LARA, JAIDI RIVERA LARA, MARIA CRISTINA RIVERA LARA, CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO, IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO, CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO, como consecuencia de los daños y perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación, por la muerte que le causó con el arma de fuego de dotación Oficial (Pistola Sig Sauer) al Subintendente FERNEY CRUZ LARA de la policía Nacional, el Intendente **GARCIA VALENCIA JORGE** de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en Octubre 31 de 2013, quien disparó su arma de dotación oficial y en servicio, contra el Subintendente **FERNEY CRUZ LARA**, durante el ejercicio teórico-práctico sin munición, de enfunde y desenfunde de pistola Sig Sauer con su respectiva funda Sherpa III, causándole como consecuencia la MUERTE, hechos ocurridos en el parqueadero de la estación de Policía de Media canoa, jurisdicción Municipio de Yotoco Valle Del cauca, producto de la actuación irregular de funcionarios de la institución pública demandada.

SEGUNDA: Que como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene a la entidad demandada a pagar las siguientes sumas de dinero:

1. PERJUICIOS MATERIALES. Se hará bajo las siguientes modalidades:

1-1 Daño emergente. Con motivo del fallecimiento del Subintendente FERNEY CRUZ LARA los gastos de transporte fueron asumidos por los demandantes domiciliados en Palmira, Bogotá y Girardot, suma que asciende a CUATRO (4) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES por el valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE, (\$2'358.000).

En forma subsidiaria solicito al señor Juez ordenar el pago de este estipendio conforme la cuantía que se sirva determinar atendiendo los principios de equidad y de reparación integral así como las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corporación Internacional que ha entendido bajo ciertas circunstancias², que este perjuicio puede presumirse, y que no obstante no lograr probarse, la *equidad* surge como criterio para su estimación³.

2. Ver entre otras, Caso Niños de la Calle vs Guatemala, sentencia del 26 de mayo de 2001, núm. 79; Caso de la "Panel Blanca" vs Guatemala, 25 de mayo de 2001 núm. 116; Caso "El Caracazo vs. Venezuela", sentencia de 29 de agosto de 2002, núm. 50.

3. La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad".

Es lógico además entender que en virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resultan efectivos al momento de dilucidar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de su reparación.¹⁰

2. PERJUICIOS INMATERIALES.

2.1. Perjuicios morales.

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito efectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual, situaciones que como se demostrará; se evidenciaron tanto en la víctima, los hijos, la esposa, los padres, los hermanos, tíos, sobrinos y la abuela.

⁴ FERNANDEZ SESSAREGO Carlos. El daño a la persona (Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1995, págs. 71 y ss). Artículo compilado en el texto DEL DAÑO, José N. Duque Gómez. Editora Jurídica de Colombia. Primera Edición 2011.

Atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tasaré así:

- a) ARNULFO CRUZ, doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- b) CARMEN ELENA LARA DE CRUZ, *doscientos* (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- c) SANDRA CANIZALES OLAVE *doscientos* (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- d) TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO *doscientos* (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- e) FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES *doscientos* (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- f) MARIELA CRUZ LARA *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- g) GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- h) SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- i) JOSE ARNULFO CRUZ LARA *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- j) LILIA LARA DE RIVERA *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- k) BLANCA LILIA RIVERA LARA, *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- l) JAIDI RIVERA LARA *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

- m) MARIA CRISTINA RIVERA LARA *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- n) CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- o) IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- p) CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- q) DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- r) LAURA SOFIA CRUZ BARRERO *cien* (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.2. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN.

Condénese a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa-Policía Nacional, representadas legalmente por el señor Ministro de Defensa Nacional y por el señor Director General de la Policía Nacional, a pagar a cada uno de los actores CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, a los señores ARNULFO CRUZ, y CARMEN ELENA LARA DE CRUZ (Padres) de la Víctima; SANDRA CANIZALES OLAVE en su condición de Esposa, y Representante Legal del menor FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES (Hijo) de la Víctima; la señora MILI YOBANA FANDIÑO TAFUR Representante Legal de la menor TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO (Hija extramatrimonial) de la Víctima; MARIELA CRUZ LARA, GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA y en Representación Legal de sus hijos menores DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO Y LAURA SOFIA CRUZ BARRERO, SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, JOSE ARNULFO CRUZ LARA (Hermanos y sobrinos) de la Víctima; LILIA LARA DE RIVERA (Abuela) de la víctima; BLANCA LILIA RIVERA LARA, JAIDI RIVERA LARA, MARIA CRISTINA RIVERA LARA (Tías) de la víctima; CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO, IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO, CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO (Sobrinos), en su condición de Padres, Esposa, Hijos, Hermanos, Abuela, Tías, y Sobrinos de la víctima, o a quien represente sus derechos al momento del Fallo que ponga fin al presente proceso, o a quien represente sus derechos al momento del Auto de aprobación del Acuerdo Conciliatorio, por el daño a la vida de relación que ha causado el dolor, tristeza y zozobra, que les ha dejado la muerte, que le causó con el arma de fuego de dotación Oficial (Pistola Sig Sauer) al Subintendente FERNEY CRUZ LARA de la policía Nacional, el Intendente **GARCIA VALENCIA JORGE** de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en Octubre 31 de 2013, observándose para ello los principios de reparación integral y equidad del daño establecidos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, reconocidos ampliamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Con respecto al daño a la vida de relación, resulta pertinente acudir al pensamiento jurisprudencial que sobre el tema ha emitido el Honorable Consejo de Estado:

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

“...En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación se distingue por las siguientes características o particularidades: a.- tiene naturaleza extramatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es

económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado, b.- adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho, c.- en las situaciones de la vida

práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico, d.- no sólo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses legítimos, e.- según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, como verbigracia, el cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos o por aquella y éstos, f.- su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se derivan, y g.- es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño-patrimonial o extrapatrimonial- que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos caso, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas¹ ...”

TASACION DEL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

- a) ARNULFO CRUZ, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- b) CARMEN ELENA LARA DE CRUZ, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- c) SANDRA CANIZALES OLAVE cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- d) TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- e) FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- f) MARIELA CRUZ LARA cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- g) GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, *sentencia* del 13 de mayo de 2008, Radicado 11001-3103-006-1997-09327-01.

- h) SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- i) JOSE ARNULFO CRUZ LARA cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- j) LILIA LARA DE RIVERA cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- k) BLANCA LILIA RIVERA LARA, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- l) JAIDI RIVERA LARA cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- m) MARIA CRISTINA RIVERA LARA cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- n) CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- o) IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- p) CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- q) DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- r) LAURA SOFIA CRUZ BARRERO cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

TERCERO. Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en derecho de acuerdo a la norma rectora.

CUARTO. Que se ordene que el valor de la indemnización se liquide con el ajuste previsto en el artículo 192 inciso 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO. Que se ordene cumplir con la sentencia en el término indicado en el artículo 192 inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

HECHOS

Primero. El Subintendente **FERNEY CRUZ LARA**, quien se había vinculado a la POLICIA NACIONAL, en Noviembre 01 de 2003 destacándose siempre como una persona responsable y cumplidora de su deber, excelente servidor público, que durante su carrera alcanzo el grado de SUBINTENDENTE.

Segundo. En el año 2012 el Subintendente FERNEY CRUZ LARA fue evaluado por última vez, a cargo de los Jefes de la Seccional Tránsito y Transporte Valle del Cauca de la Institución Policial, mediante formulario No. II de seguimiento, donde se registra el desempeño eficaz, comportamiento,

compromiso, cumplimiento, puntualidad y efectividad, en las labores asignadas, sin ser objeto de llamados de atención por parte de sus superiores.

Tercero. El día 31 de Octubre de 2013, siendo las 14:00 horas, el SUBINTENDENTE FERNEY CRUZ LARA se encontraba en la instrucción del ejercicio teórico-práctico sin munición, de enfunde y desenfunde de pistola Sig Sauer con su respectiva funda Sherpa III, bajo la dirección del instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS.

Cuarto: El Informe Administrativo por Muerte No. 201/13 indica en la Situación Fáctica, que: "el día 31 de Octubre de 2013 a las 14:45 horas, con el señor Subintendente FERNEY CRUZ LARA quien se identifica con cedula de ciudadanía No. 11.221.060 de Girardot, mientras realizaba un ejercicio teórico-práctico sin munición de enfunde y desenfunde de pistola Sig Sauer con su respectiva funda sherpa III, de acuerdo a lo informado por el señor Subintendente HELMER RUIZ ARCINIEGAS Responsable de Entrenamiento Grupo UNIR, sobre las 14:00 horas, llega al lugar de la Instrucción formando el grupo en dos escuadras colocando una de espaldas a la otra, ordenando desenfundar la pistola, retirar el cargador y luego guardarlo, posteriormente les ordeno en forma clara que a partir de ese momento el arma debería estar en todo momento sin proveedor mientras se encontraran en instrucción, seguidamente verifico que el arma de cada uno de los uniformados estuviera libre, hecha esta verificación ordeno enfundar la pistola y que las dos escuadras se giraran quedando una frente de la otra, dando inicio a la clase explicándoles diferentes aspectos relacionados con el arma; seguidamente les enseña el desarme de campaña y coloca a los uniformados a que desarmen y armen el arma varias veces para que adquieran destreza en este procedimiento, luego les da instrucción acerca de la funda Sherpa III, les hablo del ensamble de la funda a la reata, seguros de la funda y los siete (7) pasos básicos para desenfundar y enfundar la pistola, ese ejercicio lo realizaron en varias ocasiones siguiendo las instrucciones del señor Subintendente RUIZ, posteriormente el personal se ubica por parejas, el instructor da la orden nuevamente de inspeccionar el arma y como están por parejas el uno le verifica al otro que la pistola este libre, les ordeno enfundar el arma y realizar el ejercicio de desenfunde y enfunde frente al compañero para que este verifique que tan ágil se realiza el ejercicio, al momento que dio la orden de adelantar el ejercicio escucha un disparo y ve que el señor Subintendente FERNEY CRUZ LARA cae al piso, encontrándose frente al señor Intendente GARCIA VALENCIA JORGE identificado con cedula de ciudadanía No. 11.685.103, el instructor toma la pistola de las manos de este uniformado y se da cuenta que tiene el proveedor puesto, desobedeciendo la orden que se les había impartido de mantener en todo momento de la instrucción el arma sin proveedor, observa que el señor Subintendente CRUZ presenta una mancha en el costado izquierdo del abdomen".

Quinto. Una vez sucedidos los hechos, sus compañeros le prestan los primeros auxilios, siendo llevado de urgencia inicialmente, a la Clínica Urgencias Médicas S.A.S. de Buga Valle, luego allí, deciden trasladarlo como URGENCIA VITAL al Hospital San José de la misma ciudad, donde fallece a las 14:00, según el registro Civil de

Defunción con Indicativo Serial No. 5479900 de la Registraduría Nacional del estado Civil.

Sexto. El día que sucedieron los hechos motivos de esta demanda, el señor Subintendente HELMER RUIZ ARCINIEGAS Responsable de Entrenamiento Grupo UNIR, OMITIO, verificar rigurosamente que el ejercicio teórico-práctico sin munición de enfunde y desenfunde de pistola Sig Sauer con su respectiva funda sherpa III, se realizara realmente SIN PROVEEDOR Y SIN CARTUCHO EN LA RECAMARA, permitiendo así una falla por parte de la Policía Nacional en el actuar de sus miembros, Subintendente e Intendente, que violaron las MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE ARMAS Y LAS ORDENES IMPARTIDAS por el instructor, de realizar el ejercicio sin estos elementos de dotación oficial, durante el transcurrir de los ejercicios de reentrenamiento, de alto riesgo.

Séptimo. Es claro que en la realización de este reentrenamiento tanto el Subintendente RUIZ ARCINIEGAS, omitió inspeccionar y verificar rigurosamente que sus dirigidos hubiesen acatado la orden de realizar el ejercicio, de enfunde y desenfunde de pistola Sig Sauer con su respectiva funda sherpa III, sin proveedor y sin munición. Además que el Intendente GARCIA VALENCIA JORGE no acató la "...ordene desenfundar la pistola quitar el proveedor y guardarlo..", del Subintendente RUIZ ARCINIEGAS, incurriendo en una falta grave de INDISCIPLINA el Intendente GARCIA VALENCIA, situación que desencadenó en la muerte del Subintendente FERNEY CRUZ LARA.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el régimen de imputación subjetivo de responsabilidad que nos ocupa o que se encasilla a los hechos es la denominada falla del servicio probada, la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos necesarios:

- El daño sufrido por el interesado: En este caso ese daño antijurídico es precisamente la muerte del Subintendente FERNEY CRUZ LARA, hecho del cual se deriva el daño moral de la familia representado en el profundo dolor por el cual están pasando todos los familiares, debido a que la pérdida de su hijo, hermano, tío, padre y esposo, ha causado un dolor intenso indescriptible por la pérdida de ese ser amado.
- La falla del servicio propiamente dicha, consiste en el mal funcionamiento del servicio, porque no funciona cuando debió hacerlo o lo hizo tardía o equivocadamente. Como se esbozó en la parte de los hechos, la falla en el servicio se da al OMITIR EL SUBINTENDENTE DE MANDO EL INSTRUCTOR (HELMER RUIZ ARCINIEGAS), QUE ERA EL LLAMADO A VERIFICAR RIGUROSAMENTE QUE SUS ORDENES FUERAN ACATADAS PARA IMPONER ORDEN Y DISCIPLINA EN EL EJERCICIO TEÓRICO-PRÁCTICO SIN MUNICIÓN DE ENFUNDE Y DESENFUNDE DE PISTOLA SIG SAUER CON SU RESPECTIVA FUNDA SHERPA III, SE REALIZARA REALMENTE SIN PROVEEDOR Y SIN CARTUCHO EN LA RECAMARA. DE IGUAL MANERA EL INTENDENTE JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA (INSTRUIDO), EN UN ACTO GRAVE DE

INDISCIPLINA , NO ACATO LA ORDEN DE SU INSTRUCTOR, DE EXTRAER EL PROVEEDOR DE LA PISTOLA Y MENOS REVISAR QUE EN

LA RECAMARA DE LA MISMA, QUEDASE PROYECTIL O CARTUCHO, SITUACION QUE GENERO EL HECHO TRAGICO.

El nexo de causalidad entre estos dos elementos: es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio: se da producto de la omisión del oficial policial que verificara rigurosamente que sus órdenes fueran acatadas al pie de la letra, por sus dirigidos tal como las había impartido, por ese hecho en el cual perdió la vida el Subintendente FERNEY CRUZ LARA, ya que si este hubiese verificado rigurosamente, cada paso de los ejercicios de reentrenamiento, se había evitado la muerte de esta unidad policial.

Ha sido insistente la jurisprudencia del H. Consejo de Estado al señalar la responsabilidad del Estado por el manejo de armas de dotación oficial, al expresar que: "la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de armas de fuego de las cuales esta dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el D.A.S., o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de artefactos peligrosos". Podemos decir entonces que el título de imputación que nos ocupa es la falla en el servicio, por cuanto "en términos generales la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se hubiere producido como consecuencia de una violación-conducta activa u omisiva- del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales hubiere incurrido la Administración y se constituye en un juicio de reproche....1",

Es de resaltar señoría, como prueba acreditada del **NEXO CAUSAL** aportada con la demanda, esto es, el fallo de Enero 20 de 2014 de la Oficina Control Disciplinario Interno, Departamento de Policía Valle, donde se profirió sentencia de primera instancia DEVAL-2013-150 en contra del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA C.C. No. 11685.103, por incurrir en la infracción de la norma de comportamiento GRAVE a título de CULPA GRAVISIMA, siendo SANCIONADO por la responsabilidad disciplinaria con SUSPENSION E INHABILIDAD ESPECIAL POR UN TÉRMINO DE DOS (2) MESES, SIN DERECHO A REMUNERACION de acuerdo al artículo 35 numeral 17 de la Ley 1015 de 2006.

De igual manera, se arrima como prueba acreditada del **NEXO CAUSAL**, la aportada como prueba documental en la demanda, esto es, en la copia del **INFORMATIVO ADMINISTRATIVO DE MUERTE** No. 201/13 emitido por la **POLICIA NACIONAL**, en cuyas consideraciones jurídicas, se establece en el penúltimo párrafo que: "se demuestra la configuración del nexo de causalidad respecto de la actividad que se encontraba realizando el uniformado".

Octavo. Por esta razón, es importante llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes y evitar someter a mis poderdantes a un proceso Contencioso que puede demorarse muchos años, puesto que es clara la responsabilidad de la Policía Nacional en este caso.

No es de tan buen recibo, que a sabiendas del alto riesgo que genera la manipulación de armas, la Unidad Policial responsable del reentrenamiento, haya omitido verificar rigurosamente las pistolas en el momento de este ejercicio que dirigía; como también el Intendente actor del hecho dañoso, haya incurrido en una falta grave de indisciplina al no acatar la orden de realizar los ejercicios sin proveedor y sin cartucho en la recámara a efectos de evitar los hechos que desencadenaron la trágica muerte del Subintendente FERNEY CRUZ LARA, es importante resaltar que los hechos podían haber trascendido a mayores, pues se expuso a inminente peligro la vida de las otras unidades policiales que se encontraban en esta actividad.

Noveno. Con la actuación negligente del ente convocado se produjo la muerte trágica del Subintendente FERNEY CRUZ LARA, lo cual produjo perjuicios de orden inmaterial a los convocantes.

Efectivamente, la pérdida de su querido hijo, hermano, padre, esposo, y tío ha ocasionado en el grupo familiar una aflicción o tristeza indescriptible, que sobrepasa con creces los sacrificios que normalmente deben soportar las personas integrantes de una sociedad, lo cual constituye un PERJUICIO MORAL. Igualmente, desde la ocurrencia de estos hechos, la forma de vida de mis poderdantes se vio afectada, ya que a pesar de que la vida continua, es indudable que el ánimo de seguir adelante con una vida normal cambia con una tragedia como esta. Por lo cual, es evidente que la vida de relación de la familia ha sufrido un incalculable daño, que a pesar de su imposible cuantificación, debe ser resarcido siguiendo los lineamientos del Principio de reparación integral y con equidad del daño.

Decimo. La Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional en Formato Hojas de Servicio, de Diciembre 23 de 2013, registra que el Subintendente Ferney Cruz Lara devengaba un salario de \$1.845.314,40 incluidos los Factores Salariales.

Décimo Primero. En Enero 20 de 2014 la Oficina Control Disciplinario Interno, Departamento de Policía Valle, profirió fallo de primera instancia DEVAL-2013-150 en contra del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA C.C. No. 11685.103 donde lo SANCIONO por la responsabilidad disciplinaria con SUSPENSION E INHABILIDAD ESPECIAL POR UN TÉRMINO DE DOS (2) MESES, SIN DERECHO A REMUNERACION de acuerdo al artículo 35 numeral 17 de la Ley 1015 de 2006.

Décimo Segundo En Septiembre 02 de 2014 los demandantes mediante apoderado judicial presentaron solicitud de Conciliación ante la Procuraduría No. 166 Judicial II de Cali, la cual fijó fecha para el 11 de Noviembre de 2014 a las 09:00 A.M., en cuya Acta de Audiencia de Conciliación Extrajudicial N° 479 y Constancia quedo consignada la inasistencia de la parte convocada, siendo agotado el requisito prejudicial.

Décimo Tercero. En igual sentido, el Juzgado 194 de Instrucción Penal Militar DEVAL sumario con radicado No. 077, en el que cursa proceso en contra del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA que se encuentra en la etapa de instrucción aún.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Invoco como normas de derecho las siguientes:

Constitución Nacional. Artículos 2, 5, 6, 11, 85, 90, 93, 218 y 222

Artículo 2. *“Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado”.*

En su artículo 90, reza:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Protección de los Derechos Humanos en el Servicio de Policía (Libro), Tomo 2. Publicación de la Policía Nacional de Colombia, Dirección General-Oficina de Planeación, Año 2010.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Título III artículo 140.

ACTAS de Instrucción y socialización.

DITRA-GRUIR 2.92, de Octubre 24 de 2013, de las 17:00, 17:30, y 17:50; Orden de Servicio No. 0123 DITRA-PLANE 38-16 Decálogo de Seguridad de las Armas de Fuego y el

Orden de Servicio No. 0213 DITRA-PLANE 38-16, Septiembre 27 de 2013.

Orden de Servicio No. 224 DITRA-PLANE 38-16, Octubre 08 de 2013.

Decálogo de Seguridad de las Armas de Fuego.

LEY 1015 DE 2006 (febrero 7).

CONCEPTO DE LA VIOLACION

1. **Fundamento constitucional de la Responsabilidad Patrimonial de la administración pública.**

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que *"las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"*.

El artículo 90 de nuestra Constitución Política señala: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas"*. La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas. Nuestra Constitución Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a ³³ cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad. El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuridicidad objetiva, que

2. De la responsabilidad estatal derivada del irregular procedimiento efectuado por los agentes públicos.

RESPONSABILIDAD OBJETIVA

La imputación objetiva de Teoría del Riesgo.

A diferencia de lo que aconteció en materia civil, donde no se aceptó el riesgo como título de imputación porque no había texto legal que lo permitiera, la jurisdicción de lo contencioso administrativo la adoptó en 1984² el riesgo como riesgo excepcional, el cual se evidenciaba desde 1976³. En 1939 el Consejo de Estado⁴ precisó que quienes sostenían la teoría del riesgo si bien rechazaban la exigencia de la culpa como elemento para indemnizar, admitían que debía establecerse que el demandado había creado el riesgo. Esta premisa permitió traer la figura a la jurisdicción contenciosa.

El riesgo había nacido en el Consejo de Estado francés el 21 de junio de 1895 con el arrêt Cames, en el que estableció la responsabilidad por el riesgo profesional del empleador, derivado de un accidente de trabajo. En Colombia llegaba casi 100 años después asomándose desde la jurisprudencia civil, que consideraba la conducción de energía eléctrica como actividad peligrosa⁵ y aplicándole el régimen de presunción de culpa⁶.

La construcción de Suescum Monroy aportó la fisionomía al régimen: a) debe desconocerse la causa que produjo el perjuicio –por lo cual probar causa extraña exonera-; b) el régimen que normalmente se le aplica no es el de régimen de falla presunta sino probada del servicio; c) el daño que causa el perjuicio se presenta en desarrollo de una obra de Servicio Público; d) se utilizan recursos o medios que colocan al particular -o a sus bienes- en un riesgo excepcional y; e) se trata de un régimen indemnizatorio subsidiario.

El caso considerado por el Consejo de Estado fue el de una línea eléctrica que cayó en un potrero del Municipio de Quimbaya, sin que ello ocurriera por descuido o error de la administración. De hecho se desconocía la causa que lo produjo. Pero concluir que por no existir falla del servicio no se indemnizaban los daños causados era dejar un perjuicio sin reparar. Si la causa directa del perjuicio fue la caída de un cable de energía propiedad de la Administración, ésta es la llamada a responder: así lo señalaban los artículos 16 -uno de los fundamentos del Estado es la protección a la vida, honra y bienes- y 30 -la propiedad como función social que implica obligaciones que incluyen no solo el deber de abstenerse de

² CE 3, r2.744, 2/02/1984, E. Suescum.

³ CE 3, r1.482, 28/10/1976, citada.

⁴ CE, St 23/06/1939, T. Tacón.

⁵ CSJ, SCC, St 3/04/1945, F. Lequerica. Se condenó a la Empresa de Energía Eléctrica de Villavicencio con la «teoría de la responsabilidad ocasional», porque la corriente eléctrica se transmitió de la calle al tejado metálico de la casa, de allí a la cuerda extendida para colgar la ropa, y de esta a Concepción Orjuela que pereció electrocutada. Pero fue Hinestrosa -CSJ, SCC, St 24/05/1946- quien afirmó tajantemente: «*Tampoco puede menos de reconocerse, dada la peligrosidad del género de las actividades de la compañía demandada, la presunción de culpa suya ante el artículo 2356 del C.C.*»

⁶ CSJ, SCC, St 403, 08/11/1992, C. Jaramillo.

causar daño sino también el de repararlo cuando se produjere- de la Constitución Política de 1886.

Suescum Monroy consideró que «Por eso, para que los anteriores fundamentos tengan plena operancia en la época actual, caracterizada por los altos desarrollos de la tecnología, es preciso admitir que la responsabilidad administrativa no puede tener como exclusiva condición la falta o falla del servicio. Junto a este sistema tradicional, que sigue siendo obviamente el derecho común de la responsabilidad, debe reconocerse también el de la responsabilidad sin falta, como "teoría subsidiaria de aplicación excepcional". (Rivero - Droit Administratif). El caso en estudio corresponde precisamente a uno de los varios eventos que comprende la responsabilidad sin falta, el denominado por algunos expositores riesgo excepcional. Tiene ocurrencia cuando el Estado, en desarrollo de una obra de servicio Público utiliza recursos o medios que colocan a los particulares o a sus bienes en situación de quedar expuestos a “un riesgo de naturaleza excepcional” (Laubadere) el cual dada su gravedad, excede las cargas que normalmente deben soportar los mismos Particulares como contrapartida de las ventajas que resultan de la existencia de ese servicio público. Si el riesgo llega a realizarse y ocasiona un daño, sin culpa de la víctima, hay lugar a responsabilidad de la Administración, así no haya habido falta o falla del servicio».

Para 1985 el legislador empezó a dar entrada al riesgo excepcional⁷ al establecer a favor del cónyuge y los hijos menores o incapacitados de los funcionarios de la rama judicial que fallecieran «como consecuencia de homicidio voluntario» durante el desempeño de su cargo murieran sin cumplir el tiempo necesario para adquirir la pensión. Rodríguez Rodríguez agregó que también había prohijado la teoría la Ley 16 de 1988 que estableció el seguro de vida para dichos funcionarios al perder la vida en hechos violentos.

Con pureza metodológica y sobre las trazas de Suescum Monroy, De Irisarri Restrepo empezó a aplicar la teoría. En 1989⁸, por ejemplo, analizó desde el riesgo excepcional la demanda de perjuicios por una línea primaria de alto voltaje que cayó en un potrero de en la hacienda “Flandes”. Meses más tarde⁹ afirmó que en casos similares, la indemnización de perjuicios debía estudiarse sobre los supuestos de la teoría del riesgo, justamente con el que se decidió la condena de perjuicios que causó la explosión de una línea subterránea de energía en Medellín¹⁰. En la Aclaración de Voto, Betancur Jaramillo y Bonivento Fernández expresaron los temores

⁷ CE SPI, R-029, 12/07/1988, S. Rodríguez.

⁸ CE 3, r4.655, 20/02/1989, A. De Irisarri.

⁹ CE 3, r4.510, 5/10/1989, A. De Irisarri.

¹⁰ CE 3, r2.846, 8/03/1984, A. De Irisarri.

de masificar la figura, pidiendo que tuviese un manejo jurisprudencial «demasiado restringido, para que no pueda prestarse a una consagración frecuente y, por tanto, a generalizarse peligrosamente, con prescindencia de los factores eximentes de responsabilidad, como los ya mencionados –fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa de la víctima-». El tiempo demostró que los temores resultaron fundados.

En 1960¹¹, antes de admitirse el riesgo excepcional, se había diferenciado entre los daños provenientes del riesgo de una actividad peligrosa y los trabajos públicos. La verdad es que en Francia la última era una aplicación de la primera, en la que se respondía por crear el riesgo mientras que en los trabajos públicos por los daños producidos en los inmuebles. De allí que ambos tuviesen en común la eximente de probar la culpa. Rojas Arbeláez¹², apoyado en Waline, empleó la base teórica del daño especial para reparar los perjuicios ocasionados por una obra pública, porque «desde luego implica una contribución al bien general y en condiciones desiguales respecto a los demás ciudadanos. Por lo mismo es justo que se den al damnificado los medios para obtener la reparación cuando se ha reconocido el principio de igualdad ante las cargas públicas».

Se aplicó a la construcción de obras civiles -incluso cuando la actividad afecta el valor patrimonial de otra obra¹³-, cuando se cumplían los presupuestos del régimen, incluso cuando se contrata la ejecución de la obra con particulares, porque desde 1985¹⁴ se consideró que en tal caso es como si la misma administración la llevara a cabo. La verdad es que desde 1939 la Corte Suprema¹⁵ había aceptado esa doctrina, pues «lo mismo significa que tal obra haya sido hecha por los funcionarios municipales directamente o por medio de contratos de construcción intervenidos por los ingenieros oficiales. Siempre es el Municipio el autor y responsable directo del funcionamiento eficiente e inocuo del servicio».

La responsabilidad estatal aparece pues si se prueba¹⁶ que: i)- la administración es dueña de la obra, ii)- el pago afecta el patrimonio estatal, y iii)- se contrata por razones del servicio e interés general. Cuando la causa del perjuicio ya no es el mal o inoportuno funcionamiento de la obra, propio de la falla del servicio, el régimen cambiaba a riesgo excepcional.

Pero el régimen empezó a falsear cuando se le colgaron los atentados por actos terroristas, pues se empezó a abrir paso la tendencia

¹¹ CE 3, St 30/09/1960, F. Gómez.

¹² CE 3, St 15/10/1964, G. Rojas.

¹³ CE 3, r5.246, 18/04/1998, C. Betancur.

¹⁴ CE 3, r4.556, 9/10/ 1985, C. Betancur.

¹⁵ CSJ, SCC, St 21/08/1939, H. Salamanca.

¹⁶ CE 3, r10.504, Auto del 25/06/1997, .

de que aquellas actividades peligrosas que no pudieran manejarse con falla presunta sino gobernarse por falla del servicio, se hiciera con el riesgo excepcional, a pesar de que no se cumplieran los demás requisitos.

Los actos terroristas primero se analizaron con el título de imputación de daño especial¹⁷, indemnizándose por el desequilibrio en la carga pública: una especie de riesgo social. Eso supondría que todo aquel que padeciera un perjuicio por tal causa lo pudiera demandar, lo que en un país como Colombia podría terminar desquiciando las finanzas públicas. Parece más bien que a evitar esto fue a lo que se le apuntó cuando se criticó¹⁸ la indemnización por el daño especial, vaporizándose con el decir que se trataba de una amenaza potencial contra el actuar legítimo de la autoridad –como en el daño especial- que coloca -nexo de causalidad- en riesgo a algunas personas. La verdad es que no son mejores razones que las proporcionadas para indemnizar por el daño especial, máxime que hoy todos parecemos expuestos al terrorismo. Nadie discute que en principio se aplica el régimen de falla probada cuando el acto terrorista se presenta en una situación específica que excluye la generalidad -estado de anormalidad ordinaria del orden público- y que hacía previsible que se desencadenara¹⁹: el acto terrorista aparece entonces como consecuencia de la omisión del Estado en repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso a través de los medios de protección y vigilancia que disponía²⁰, pues nadie está obligado a lo imposible, ni siquiera el Estado. Lo que se dice es que la sinópsis histórica del riesgo excepcional, por los requisitos que él debe cumplir, lo hace dudosamente aplicable a los actos terroristas.

La responsabilidad objetiva por riesgo excepcional ha sido decantada por la jurisprudencia en los eventos de actividades peligrosas, como **el uso de la armas de dotación oficial, la conducción de vehículos, las redes de energía eléctrica y toda situación que implique riesgo como los atentados terroristas a objetivos públicos ubicados cerca de los bienes o personas particulares o la ejecución de determinadas obras públicas.**

2.1. Actuación ilícita e irregular de la Fuerza Pública.

Sobre el uso de armas de dotación oficial la jurisprudencia en la actualidad se aplica como la responsabilidad por riesgo excepcional, evento en el cual solo basta demostrar el daño y la relación de causalidad, cuando en actos del servicio, con armas de dotación oficial y en cumplimiento de deberes oficiales se producen lesiones, muertes o daños a bienes.

¹⁷ CE 3, r8.577, 23/09/1994, J. Uribe.

¹⁸ Hernández, A. Evolución jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por daños causados por actos terroristas. Conferencia dictada en el Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado. Medellín, 30 de marzo de 2001.

¹⁹ CE 3, r10.627, 13/05/1996, r10.654, 5/09/1996, r12.378, 3/04/1997, .

²⁰ r8.577, 23/09/1994, citada.

En el caso que nos ocupa se encuentra más que probados los elementos, pues los policiales se encontraban en una instrucción policial, la cual no contó con el acompañamiento pertinente para el manejo de las armas de fuego, es decir el policial se encontraba en cumplimiento de un deber oficial y por otro lado el arma que produjo el deceso del agente era de uso de las fuerza armada y por tanto oficial.

“El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 C. P., encuentra hoy su desarrollo en la Ley 678 de 2001, ‘por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de (sic) llamamiento en garantía con fines de repetición’.

Esta ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hubiere dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública hubiere ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. “(...)

“En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si el llamado actuó con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

‘Artículo 63 C. C.-Clases de culpa y dolo.

La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

‘Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

‘(...)

‘El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

“(...

“En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las

consecuencias nocivas –actuación dolosa–, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo –actuación gravemente culposa–”.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, como la causa eficiente del daño que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad de la administración estuvo determinada por la conducta negligente del agente del Estado llamado en garantía, en tanto que accionó el arma de dotación asignada para el servicio con la errada convicción de que la misma se encontraba descargada, con lo cual desconoció la instrucción

que tenía sobre los protocolos de seguridad del manejo armas de fuego, tal descuido supone una conducta constitutiva de culpa grave - en los términos prescritos en el artículo 63 del Código Civil- por parte de tal agente, que compromete su responsabilidad y lo obliga a rembolsar las sumas de dinero que la entidad demandada debe pagar como consecuencia de la condena que se imponga en esta instancia.

Acompañamiento jurisprudencial

- **Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Febrero 11 de 2009 Exp. 05001-23-26-000-1996-00960-01 (173318), Mp. Ruth Estella Correa Palacio**
- **Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de Abril 23 de 2008 Exp. 20001-23-31-000-1998-03913-01 (16525), Mp. Mauricio Fajardo Gómez**
- **Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de Abril 9 de 2014, 76001-23-31-000-2000-01498-01(29811), Mp. Alberto Zambrano Barrera**

2.2 Daño causado.

Planteado que existió un hecho irregular de la autoridad pública, para poder invocar el deber indemnizatorio de la entidad estatal, encontramos asimismo que tal acto anómalo generó un perjuicio, un daño que surge única y exclusivamente del suceso anómalo. Como lo demostramos en la investigación interna llevada en la Oficina Control Disciplinario Interno, Departamento de Policía Valle, donde profirió fallo de primera instancia DEVAL-2013-150 en contra del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA C.C. No. 11685.103 donde lo SANCIONO por la responsabilidad disciplinaria con SUSPENSION E INHABILIDAD ESPECIAL POR UN TÉRMINO DE DOS (2) MESES, SIN DERECHO A REMUNERACION de acuerdo al artículo 35 numeral 17 de la Ley 1015 de 2006, por haber incurrido en la infracción de la norma con un comportamiento GRAVE a título de CULPA GRAVISIMA, investigación llevada a cabo por parte de la policía, estando en espera de la prueba trasladada de las resultas de la justicia penal militar y como se lograra demostrar con los testimonios de los policiales que presenciaron el hechos, sumado a ello la utilización de la arma de dotación en cumplimiento de un servicio el cual se dio con la instrucción y manejo inadecuado de la arma de fuego de dotación oficial, también podrá constatarse con la inspección a cadáver realizada por medicina legal en la que se puede determinar la causa de la muerte y las condiciones de los proyectiles encontrados en la humanidad del

occiso de los cuales se logra determinar que provenían de un arma de fuego de dotación oficial, misma que horas antes fue utilizada en la instrucción que desato la muerte del policial.

2.3. Imputabilidad y causalidad.

Nuestra jurisprudencia ha decantado a partir de la lectura del artículo 90 constitucional que la responsabilidad patrimonial de una institución pública, deberá tenerse por probado el daño antijurídico y que éste pueda imputarse a la entidad acusada.²³

²³ Con anterioridad a esta interpretación, la doctrina y la jurisprudencia descansó el concepto de responsabilidad en la existencia de tres elementos, el hecho, el daño y el denominado nexo de causalidad.

“La imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. (...) Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, **la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción.** Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”. (...). Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. (...) la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico)” 24 (resaltado fuera de texto) 24 Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), radicación número: 25000-23-26-000-1998-00731-01(19434), Actor: Luis Enrique Ruiz Quiroga y otros vs Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Podemos definir el *nexo causal* como la relación que debe existir entre el comportamiento o conducta del agente y el resultado desfavorable producido; esta confrontación causal tiene que hacerse a través de un estudio retrospectivo donde se tienen en cuenta los sucesos acaecidos que se considera han sido el antecedente de la consecuencia producida, teniendo siempre presente que en este proceso cada antecedente es un eslabón más de la cadena causal que ha intervenido en la generación del hecho que se investiga, en otros términos lo que se busca es demostrar la presencia de un vínculo necesario entre un antecedente (causa) y un consiguiente (efecto).

Por consiguiente, para lograr establecer la causa en el evento sub-lite, debemos acudir al antecedente de la institución convocada, es decir la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y reglamentarios. Demostrando de forma contundente que la acción anormal fue la causa eficiente del daño causado al reclamante, en otros términos, evidencia claramente la relación causal entre la irregularidad administrativa y el daño; por lo tanto al concurrir los componentes del régimen de responsabilidad de la falla o falta del servicio, deberá instarse a la institución pública el deber de resarcir toda lesión a bien jurídico o perjuicio originado a nuestros mandantes.

Encontramos que en el libro PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO DE POLICÍA, Tomo 2, y las ACTAS de Instrucción y socialización

DITRA-GRUIR 2.92, de Octubre 24 de 2013, de las 17:00, 17:30, y 17:50 expresamente se registra cuál es el procedimiento policivo para un caso como el que ocupa nuestra atención, veamos:

“...2.1. USO DE LAS ARMAS DE FUEGO

Las armas de fuego solo pueden ser usadas para proteger derechos equivalentes o superiores de injusta agresión, actual o inminente, siempre que esa defensa sea proporcional a ese riesgo, lo cual no implica, en estricto sentido, que haya igualdad de armas para contrarrestarlo, sino que para conjurarlo o evitarlo se utilicen los medios más eficaces sin causar daños innecesarios.

*El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de la organización de naciones unidas mediante resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, establece que “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema, que no deberán emplearse armas de fuego excepto VER: Aprobación: 05-11-2010 **46 Protección de los Derechos Humanos en el Servicio de Policía***

cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas, y que en todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes”.

El personal de la Policía Nacional, cuando reciba capacitación o instrucción en prácticas de tiro, deberá dejar constancia en el formulario de seguimiento del tipo de arma utilizada, detallando munición, distancia, posición y resultados obtenidos, para que obre como documento oficial de consulta de la idoneidad en el manejo de las armas de fuego, tal y como se exige dentro de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) en 1990.

La Policía Nacional, a través del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, desconoció todas las medidas de protección de la vida e integridad de sus compañeros de instrucción en el procedimiento policial antes referenciado, donde con el arma de dotación Tipo Pistola SIG SAUER, de propiedad de la Policía Nacional, hizo caso omiso a lo dispuesto para esta clase de procedimientos, desatendiendo la orden de realizar la practica sin el PROVEEDOR Y SIN MUNICION en el arma, al emplear el arma de fuego, con munición y proveedor, contrariamente a todo ello, éste disparó imprudentemente su arma contra la humanidad del señor Subintendente FERNEY CRUZ LARA, quien no estaba asumiendo conducta alguna contra el policial que ameritara el uso del arma, simplemente estaba participando del reentrenamiento de enfunde y desenfunde de la pistola Sig Sauer ordenado por la institución, en el parqueadero de la estación de Policía de Media Canoa, jurisdicción Municipio de Yotoco, Valle del Cauca, ocasionándole graves lesiones que le causaron la muerte, al afectar sus órganos vitales como lo demuestra el material probatorio.

El señor Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, sin justificación alguna porque dicho compañero de Unidad Policial no representó ningún peligro para la

integridad ni la seguridad de los policiales en la actividad de entrenamiento, sin mediar advertencia disparo su arma de dotación contra el señor Subintendente FERNEY CRUZ LARA, ocasionándole las heridas, que le desencadenaron su fallecimiento.

- De igual manera el Instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS, quien había impartido la orden de realizar la instrucción sin proveedor, desplego una falla en el servicio, al OMITIR, verificar arma por arma de cada Policía bajo su responsabilidad, ante tan importante momento de la instrucción, la de realizar la práctica de desenfunde y enfunde del arma de dotación oficial (pistola Sig Sauer), asignada para la práctica en el reentrenamiento, ocasionando el lamentable hecho que dejo como resultado, heridas y posterior deceso del señor Subintendente FERNEY CRUZ LARA, dejando a su Esposa, Hijos, Madre y Padre, Hermanos, Abuela, Tías, y Sobrinos, sumidos en profunda tristeza, dolor, debido al fallecimiento del hijo, el padre, esposo, el tío y el nieto, causando un daño moral en la familia, de irreparable pérdida de ese ser amado.

Con la acción de los Policías, el Instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS, y el Instruido señor Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, se quebrantaron las siguientes disposiciones superiores y legales:

Artículos 2 y 90 de la Constitución Nacional. La Policía Nacional incurrió en responsabilidad por falla probada, toda vez que de la lectura de los preceptos constitucionales se puede afirmar que es el Estado quien debe no solo garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Carta Superior, sino también debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables a él.

Este precepto constitucional, fue ratificado el pasado 18 de febrero de 2010 por nuestro Honorable CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, Radicación número: 25000-23-26-000-1995-01139-01(17523) en la que se refirió al respecto:

“...RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Armas de fuego de dotación oficial / RÉGIMEN OBJETIVO - Riesgo excepcional

En la actualidad, cuando se debate la responsabilidad del Estado por daños causados accidentalmente con el uso de armas de fuego, por regla general se aplica la teoría del riesgo excepcional; en efecto, **la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el D.A.S., o el Ejército Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos.** En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño y el nexo causal entre éste y una acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta

del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez la Administración, para exonerarse de responsabilidad, debe acreditar la presencia de una causa extraña, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Armas de fuego de dotación oficial / RÉGIMEN TAMBIÉN APLICABLE - Falla en el servicio

Sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación con arreglo al cual se debe definir el litigio ha de ser el de falla del servicio, en aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de que resulte condenado a la correspondiente reparación. **En términos generales, la falla del servicio probada surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación-conducta activa u omisiva- del contenido obligatorio, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las falencias en las cuales hubiere incurrido la Administración y se constituye en un juicio de reproche.** Por su parte, en ese campo la entidad pública demandada podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligatorio que le era exigible, es decir que acató los deberes a los cuales se encontraba obligada o si demuestra que el nexo causal era apenas aparente, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o hecho también exclusivo y determinante de un tercero....” (Negritas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, el daño antijurídico, es decir, las lesiones causadas al Subintendente FERNEY CRUZ LARA (la muerte) y a sus familiares el daño moral, se produce como consecuencia de la violación del contenido obligatorio a cargo del Estado, muestra de ello son los hechos donde queda evidenciada la falla, toda vez, que como consecuencia del disparo que realizó el Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, a su compañero de unidad Policial, señor CRUZ LARA, resultó gravemente herido en su humanidad por proyectil de arma de fuego (PISTOLA SIG SAUER) de alta velocidad y falleciera, sin que existiera ninguna justificación para la utilización del arma de fuego en el reentrenamiento, **con proveedor y munición de guerra**, por parte del Policial, constituyéndose lo anterior sin lugar a dudas, en una causal de responsabilidad del Estado, por la falla en el servicio, toda vez, que el Instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS había impartido la orden de realizar la instrucción sin proveedor (Pagina 2 fallo de primera instancia DEVAL-2013-150), pese a las ACTAS de Instrucción y socialización **DITRA-GRUIR**

2.92, de Octubre 24 de 2013, de las 17:00, 17:30, y 17:50 firmadas por el instructor encargado RUIZ ARCINIEGAS, donde se instruye y socializa al personal de Policía, quien también fue muy negligente, al dejar, tan importante responsabilidad, a cargo de sus subalternos, el debió haber verificado personalmente, arma por arma, que no tuviesen PROVEEDOR Y MUNICION las pistolas SIG SAUER utilizadas en el reentrenamiento.

Igualmente, el mal proceder del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, es vulneratorio de los preceptos establecidos en las ACTAS de Instrucción y socialización **DITRA-GRUIR 2.92, de Octubre 24 de 2013, de las 17:00, 17:30, y 17:50** firmadas por el instructor encargado RUIZ ARCINIEGAS, y las órdenes impartidas por este, constituyendo su actuación, en un ACTO DE INDISCIPLINA, fallado disciplinariamente muy GENEROSO, ante tamaño resultado, dejando un mal ejemplo de Justicia Institucional.

En cuanto a la Responsabilidad del Estado y la Acción de Reparación Directa como mecanismo de concreción de la responsabilidad estatal, la Honorable Corte Constitucional ha puntualizado:

“...3. La Responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Carta establece:

Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

La Asamblea Nacional Constituyente, según el constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero, cambió la responsabilidad del Estado ya que "se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa, del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta antijuridicidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de un título jurídico válido y que exceda el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social.

Por lo que hace a la imputabilidad, se trata de resaltar la circunstancia de que para que proceda la responsabilidad en cuestión, no basta con la mera relación de causalidad entre el daño y la acción de una autoridad pública, sino que es necesario, además, que pueda atribuirse al órgano o al Estado el deber jurídico de indemnizarlo. La determinación de las condiciones necesarias para el efecto, quedará, naturalmente, en manos de la ley y la jurisprudencia".

La responsabilidad del Estado para su concreción requiere de los siguientes requisitos: a) Que se cause un daño; b) Que ese daño sea imputable, por acción u omisión, a una autoridad pública; y c) Que ese daño sea antijurídico.

Primero, el daño, como requisito esencial de toda responsabilidad, es el resultado de la conducta del sujeto responsable hacia una persona, que se debe traducir en un perjuicio patrimonialmente evaluable para el receptor de la acción u omisión estatal.

Segundo, la imputabilidad del daño es la atribución jurídica de reparar un daño causado que reposa en cabeza de un sujeto determinado. La imputación no puede realizarse con base en la sola causación material de daño, sino que debe sustentarse, "previa justificación de su procedencia, en otras razones o títulos jurídicos

diferentes, ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el daño, la titularidad de la empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio, la dependencia en que respecto del sujeto responsable se encuentra el autor material del hecho lesivo, o cualquier otra".

Y tercero, La antijuridicidad del daño se contrae a que el sujeto que se soporta el daño no tenga el deber jurídico de afrontarlo.

En conclusión, el artículo 90 de la Carta dispone una garantía de las personas en defensa de sus derechos frente al comportamiento estatal.

4. La acción de reparación directa como mecanismo de concreción de la responsabilidad estatal.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa:

Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

*De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. **Expresión subrayada declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011***

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

“...El Constituyente estableció en el inciso segundo del artículo 218, que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Esta norma desarrolla principios fundamentales adoptados en el Título I de la Constitución, en especial los siguientes fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El servicio público de policía tiene entonces como fin primordial, la garantía de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de la convivencia, tales como la seguridad, la tranquilidad y la salubridad que transfieren ese carácter esencial a la actividad encaminada a preservarlos, en función de atribuciones ordinarias señaladas en el artículo 213 de la Carta Política... ”.²¹

En el mismo sentido, el Honorable Consejo de Estado sobre la falla del servicio ocasionada por arma de dotación oficial ha referido:

“...El perjuicio causado con arma de dotación oficial hace presumir la falla del servicio puesto que, al ser el mecanismo de la presunción una técnica probatoria que solo exonera al actor de la prueba de la falta no excluye el análisis que de la misma puede realizar el juzgador. Es pues un régimen en el cual la falla de servicio si está presente, lo que implica que se excluye por definición toda aplicación de la teoría del riesgo y de cualquier otro régimen de responsabilidad objetiva.

Por ser presunta falla del servicio esta puede ser desvirtuada por la administración, mediante prueba que desmienta la premisa sobre la cual esta cimentada la presunción: Puede la administración aportar probanza contraria que impide al juzgador extraer las consecuencias de la premisa que sirva de fundamento a la presunción de falla que pesa sobre la administración... ”.²²

²¹ Corte Constitucional. Sentencia C-020-96. Mag. Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.

²² Consejo de Estado. Sentencia de fecha 31 de julio de 1989. Mag. Ponente Dr. Antonio José Irrisari Restrepo.

El tratadista Jairo López Morales al respecto ha puntualizado:

“...En varias providencias ha sostenido esta corporación que el estado para dar cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 16 de la C.N. creó y organizó, entre otros, la denominada Policía Nacional que según las voces del Artículo 1o. del Decreto 1355 de 1970, “Esta instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que esta se derivan...”

Por ello, expresa el Artículo 2o. del reglamento de Servicio de Vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional, que esa entidad “es la institución que, al servicio de las autoridades civiles, está encargada de garantizar las libertades y el goce de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes de la república, salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados, asegurar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de las autoridades y garantizar la conservación del poder público en sus aspectos de seguridad, tranquilidad y salubridad”. Y en su Artículo 3o. agrega ese reglamento, que la policía debe extender su acción protectora no solo a los intereses colectivos sino también a los individuales.

Igualmente, ese estatuto señala cómo debe proceder la Policía y sus agentes en las labores encomendadas, exigiéndoles discreción, cautela, respeto y cultura, y por ellos exige “En sus intervenciones empleara un sano criterio profesional, interpretativo de la norma legal, sin hacer jamás uso de los rigores innecesarios” (Artículo 23).

*...Si un Agente de Policía está en la obligación de conducir hasta una estación o inspección de policía a un ciudadano que haya cometido una infracción (bien sea delito o contravención) deben primero asegurarse de cumplir, solamente en casos extremos podrá hacer uso de las armas para cumplir con su función pero siempre recordando que ese uso es Preventivo y no punitivo...”*²³

Bajo esta óptica, se demuestra que el señor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS, no aplicó los compromisos firmados en las ACTAS de Instrucción y socialización **DITRA-GRUIR 2.92, de Octubre 24 de 2013, de las 17:00, 17:30, y 17:50**, tales como:

“ Reglas Generales de Seguridad y Entrenamiento.

8- tener presente las medidas de seguridad en el polígono y con armas de fuego.

Familiarización y practica de desenfundar.

9- Se deben realizar estas maniobras de práctica con blancos laterales izquierdos y derechos asimismo estar atento a posibles amenazas sin bajar el arma y con el dedo fuera del disparador.

Estas prácticas deben realizarse en posición estática y en movimiento teniendo presente que el arma en la maniobras debe estar descargada y libre de municiones”.

“AGENDA.

3-Recordar las medidas de seguridad, e inspección de las armas de fuego.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL POLIGONO.

²³ Responsabilidad Patrimonial del Estado. Evolución de la Jurisprudencia Colombiana. Jairo López Morales. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá. 1997.

- Tenga en cuenta en todo momento el Decálogo de seguridad con las armas de fuego.

CUANDO SE EJECUTA LA INSPECCION DE SEGURIDAD.

- Antes y después de un polígono.
- Antes y después de una Instrucción.

RECOMENDACIONES EN EL POLIGONO

- Punto médico y conos
- Blancos, parapetos, cintas tapa impactos.
- Tener en cuenta la existencia de un enfermero y carro ambulancia en el polígono.

COMPROMISOS.

- 1- El personal capacitado queda comprometido al estricto cumplimiento de las respectivas medidas de seguridad en el manejo, transporte, mantenimiento y aplicación de las normas legales en el uso de las armas de fuego y en las actividades de capacitación.
- 2- Todo el personal participante está comprometido en la prevención de accidentes extremando las medidas de seguridad, durante la capacitación y después en el servicio de policía.

Normas de seguridad en el polígono.

- 2- Delante de la línea de fuego no debe haber nadie durante el polígono.
- 14- Tenga en cuenta en todo momento el Decálogo de seguridad con las armas de fuego".

"DECALOGO DE SEGURIDAD

- 3- Nunca pregunte si un arma está cargada, cerciórese por si mismo, teniendo cuidado de no halar el disparador".

Una vez expuestos los compromisos, se puede concluir que tanto el Instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS y el Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA no solo dejaron de aplicar el Decálogo de seguridad con las armas de fuego, de realizar estas maniobras de práctica con blancos laterales izquierdos, que el arma debe estar descargada y libre de municiones, tener en cuenta la existencia de un enfermero y carro ambulancia en el polígono, sino que al momento de auxiliar al señor Subintendente CRUZ LARA, lo llevaron a una Clínica de NIVEL DE COMPLEJIDAD INFERIOR en la atención médica, que el HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA, donde se hubiese aprovechado el tiempo que perdieron llevándolo inicialmente allí, y posiblemente le hubiesen salvado la vida, por ser una Institución de NIVEL MAYOR DE COMPLEJIDAD en la atención médica.

Es decir, que el señor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS y el Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, no se comportaron como lo exigía el servicio, y por ello fallaron en la salvaguardia de la vida e integridad de los compañeros, al este último, disparar su arma de dotación OFICIAL contra la humanidad del señor CRUZ LARA, cuando se encontraban en pleno reentrenamiento de enfunde y desenfunde de Pistola SIG SAUER en el

parqueadero de la estación de Policía de Media Canoa, jurisdicción Municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

Orden de Servicio No. 0213 DITRA-PLANE 38-16, Septiembre 27 de 2013.

Esta orden de servicio de Septiembre 27 de 2013 firmada por el señor Brigadier General CARLOS RAMIRO MENA BRAVO, Director de Transito Y Transporte de la

Policía Nacional, da instrucciones claras y precisas al Instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS, para desarrollar las actividades de reentrenamiento del personal de las Seccionales de Transito y Transportes de la Policía Nacional Valle Del Cauca, donde en el ítem ELEMENTOS QUE DEBE PORTAR CADA POLICIAL de la hoja 5 del anexo 01 registra el CHALECO ARNES como elementos que debía utilizar para la instrucción, de igual manera, en el anexo 03 del mismo, para el grupo de instructores. Es decir, si esta orden se hubiese cumplido a cabalidad, el Subintendente FERNEY CRUZ LARA, no hubiese fallecido a causa del disparo que le propinara su compañero el Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA.

Orden de Servicio No. 224 DITRA-PLANE 38-16, Octubre 08 de 2013.

Esta orden de servicio de Octubre 08 de 2013 firmada por el señor Teniente Coronel MARCELO NAPOLEN RUSSI CARDENAS, Jefe de Planeación DITRA de la Policía Nacional, da instrucciones claras y precisas para desarrollar las actividades de entrenamiento del personal de las Seccionales de Transito y Transportes de la Policía Nacional Valle Del Cauca, en el literal K (Grupo de Instructores), de la hoja 3 del anexo 05 registra al Instructor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS, como también los elementos que debía utilizar para la instrucción, entre otros chaleco arnés. Es decir, si esta orden se hubiese cumplido a cabalidad, el Subintendente FERNEY CRUZ LARA, no hubiese fallecido a causa del disparo que le propinara su compañero el Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA.

DECALOGO DE SEGURIDAD DE LAS ARMAS DE FUEGO

- “1. Nunca llevar munición en la recamara.
2. Tratar todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
3. Examinar siempre el arma para ver si está cargada, mostrar a los presentes que esta descargada. ¡No creer ni suponer nada!

(...)”.

En la profesión de Policía, es de obligatorio conocimiento y aplicación el Decálogo de Seguridad de las Armas de Fuego, por la naturaleza de la función y actividad de conservación del Orden Publico, a cargo de la Policía Nacional y Fuerzas Militares, que eviten la pérdida de vidas, tanto de ciudadanos como de los mismos miembros de estas instituciones, por la inobservancia de los postulados y protocolos de seguridad, con los cuales han sido capacitado y entrenados, causando detrimento patrimonial del Estado, y perjuicios de orden material (Daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (Daño moral y vida de relación), por el pago de Indemnizaciones. Para el caso concreto, el señor Subintendente HELBER RUIZ ARCINIEGAS y el Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA, no aplicaron el Decálogo de Seguridad de las Armas de Fuego, numeral 1º, “1. Nunca llevar munición en la recamara”, Toda vez, que la orden era,

de realizar el reentrenamiento sin proveedor y sin munición. En la actividad de práctica de agilidad de desenfunde y enfunde de la pistola SIG SAUER, tanto el instructor y el agresor desconocieron la presunción de "2. Tratar todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas", de igual manera irresponsable se comportaron con el numeral 3º, no aplicaron "3. Examinar siempre el arma para ver si está cargada, mostrar a los presentes que esta descargada. ¡No creer ni suponer nada!, como lo exige el Decálogo, por ello fallaron en la salvaguardia de la vida e integridad del compañero (Ferney Cruz Lara), repitiéndose una vez más, la mentada FALLA EN EL SERVICIO, dejando otra

familia en Colombia, sumida en profundo dolor y tristeza, ante el fallecimiento su familiar, a causa del disparo con arma de dotación OFICIAL de la Policía Nacional, contra la humanidad del señor CRUZ LARA, cuando se encontraban en pleno reentrenamiento de enfunde y desenfunde de Pistola SIG SAUER en el parqueadero de la estación de Policía de Media Canoa, jurisdicción Municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

LEY 1015 DE 2006 (febrero 7)

ARTÍCULO 26. MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA. Del mantenimiento de la disciplina son responsables todos los servidores de la Institución. La disciplina se mantiene mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, coadyuvando con los demás a conservarla.

ARTÍCULO 28. NOCIÓN. Orden es la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función.

ARTÍCULO 33. CLASIFICACIÓN. Las faltas disciplinarias se clasifican, en:

1. Gravísimas.
2. Graves.
3. Leves.

La protección el respeto que el Estado debe brindar a los titulares del derecho a la vida y su integridad física, no puede reducirse a una simple consideración de carácter formal, porque el derecho a la vida e integridad no sólo implica para su titular el "hallarse protegido" contra cualquier tipo de injusticia, sea ésta de índole particular o institucional, sino además, tener la posibilidad de gozar de aquellos medios sociales y económicos que le permiten a la persona vivir conforme a su propia dignidad.

1.- PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS

Solicito, al señor procurador delegado, se sirva tener como tales y darle pleno valor probatorio a las copias auténticas y simples de los siguientes documentos:

1. Poderes, copias de cédulas, y registro civiles de los demandantes.
2. Copia de cédula, Registro Civil de Nacimiento, de Matrimonio y de Defunción del Subintendente FERNEY CRUZ LARA.
3. Registro Civil de Matrimonio de los padres del Subintendente FERNEY CRUZ LARA.
4. Extracto Hoja de Vida Área de Talento Humano Del Departamento de Policía Valle del Subintendente FERNEY CRUZ LARA.

5. Epicrisis emitidas por Clínica de Urgencias S.A.S., y Hospital San José de Buga Valle.
6. Silueta con orificio de entrada y salida de proyectil de Ferney Cruz Lara.
7. Copia del **INFORMATIVO ADMINISTRATIVO DE MUERTE** No. 201/13 expedido por la **POLICIA NACIONAL**, ajustado al Artículo 25 del Decreto 019 de 2012 que elimina la AUTENTICACION DEL DOCUMENTO, (donde se narran los hechos en los cuales perdió la vida el Subintendente FERNEY CRUZ LARA.
8. Copia Auténtica de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional que, registra el salario de \$1.845.314,40 incluidos los Factores Salariales que el Subintendente Ferney Cruz Lara devengaba a la fecha del fallecimiento.
9. ACTAS de Instrucción y socialización **DITRA-GRUIR 2.92, de Octubre 24 de 2013, de las 17:00, 17:30, y 17:50**
10. Orden de Servicio No. 0213 DITRA-PLANE 38-16, Septiembre 27 de 2013.
11. Orden de Servicio No. 224 DITRA-PLANE 38-16, Octubre 08 de 2013.
12. Copia de oficio No. S-2013.022761 DITRA-ASJUD 41.1 DE Noviembre 26 de 2013.
13. Copias auténticas y simples del formato de evaluación No. 2 de seguimiento Jefe Seccional Tránsito y Transporte Valle del Cauca.
14. Acta de Audiencia de Conciliación Extrajudicial N° 479 y Constancia de Noviembre 11 de 2014 de la Procuraduría No. 166 Judicial II de Cali.
15. Copia del Fallo proceso de control disciplinario interno DEVAL-2013-150 de Enero 20/14.
16. Declaración del Subintendente Helber Ruiz Arciniegas ante la Oficina de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional.
17. Copias simples de las declaraciones rendidas en el proceso Disciplinario No. P-DEVAL-2013-267 en contra del IT. García Valencia Jorge Arturo, por los Policías presentes en los hechos motivo de esta demanda, relacionados en el acápite de pruebas testimoniales 2.1.1., de la misma.
18. Copias simples de las declaraciones rendidas en el proceso Disciplinario No. P-DEVAL-2013-267 en contra del IT. García Valencia Jorge Arturo, por el Subintendente Helber Ruiz Arciniegas, Policía Instructor presente en los hechos motivo de esta demanda.
19. Copia del formulario de seguimiento al señor Ferney Cruz Lara.

2º .- PRUEBAS TESTIMONIALES:

2.1. TESTIGOS PRESENCIALES DE LOS HECHOS:

2.1.1. Solicito al Honorable Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó fallecido el señor FERNEY CRUZ LARA; y demás supuestos fácticos de la reclamación, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia:

LUIS RICARDO VEGA QUINTERO	Patrullero
EDWIN OLIVARES ORTEGA	Subintendente
DANIEL CASTRO RODRIGUEZ	Subintendente
OSCAR JOHNY SALAZAR LUNA	Subintendente
JHON HADER LOPEZ CUARTAS	Patrullero
LUIS FELIPE MURILLO MORALES	Patrullero
GERMAN DARIO CORREA GALVEZ	Patrullero
LUIS ALBERTO NEIRA LONDOÑO	Patrullero
ALVARO FERNANDO SANTOFINIO TORO	Subintendente

De igual manera, se solicita que sean notificados del requerimiento a través y responsabilidad del señor Coronel VYRON FERNANDO CASTILLO VALENCIA Comandante Seccional de Transito, o quien haga sus veces, en la Carrera 32 con Calle 47 esquina Barrio Estonia de Palmira Valle, teniendo en cuenta que estas unidades policiales pueden ser trasladados, de acuerdo a las necesidades del servicio.

2.1.2. Solicito al honorable Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre la actividad laboral del señor Ferney Cruz Lara, sobre los perjuicios derivados a todos los reclamantes y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación.

En virtud a que los demandantes en su mayoría son mayores de edad, solo dos son menores, y vecinos de la ciudad de **Girardot Cundinamarca y Bogotá D. C.**, ruego señor Juez (a), que para la recepción de sus declaraciones, se libre atento **DESPACHO COMISORIO**, con los insertos del caso, al Juez Administrativo del Circuito de **Girardot Cundinamarca y Bogotá D. C.**, a fin que se sirva recibir su declaración, quien los deberá citar mediante telegrama o boleta de citación a las direcciones suministradas a continuación:

- ARNULFO CRUZ, CARMEN ELENA LARA DE CRUZ, MILI YOBANA FANDIÑO TAFUR Representante Legal de la menor TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO, MARIELA CRUZ LARA, GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA en Representación Legal de sus hijos menores DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO Y LAURA SOFIA CRUZ BARRERO, SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, y CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO, quienes residen en:

Girardot Cundinamarca, Manzana No. 58 Casa No. 9A, Barrio Kennedy

- LILIA LARA DE RIVERA, BLANCA LILIA RIVERA LARA, JAIDI RIVERA LARA, MARIA CRISTINA RIVERA LARA, quienes residen en:

Girardot Cundinamarca, Manzana No. 14 Casa No. 15, Barrio Kennedy

- JOSE ARNULFO CRUZ LARA, CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO, IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO, quienes residen en:

Bogotá D. C. Calle 95 # 13-87 en la oficina 302.

- SANDRA CANIZALES OLAVE, y Representante Legal del menor FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES, quienes residen en:

Palmira Valle, Carrera 31 No. 37 - 71 Barrio Colombia.

2.2. PRUEBAS TRASLADADAS:

Con todo respeto solicito al señor Juez Administrativo, se oficie:

- 1- A la Oficina Control Disciplinario Interno, Departamento de Policía Valle, profirió fallo de primera instancia No. DEVAL-2013-150 en el proceso P-DEVAL 2013-267, en contra del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA C.C. No. 11685.103 donde lo SANCIONO por la responsabilidad disciplinaria con SUSPENSION E INHABILIDAD ESPECIAL POR UN TÉRMINO DE DOS (2) MESES, SIN DERECHO A REMUNERACION de acuerdo al artículo 35 numeral 17 de la Ley 1015 de 2006, por la muerte del Subintendente FERNEY CRUZ LARA.
- 2- En igual sentido, al Juzgado 194 de Instrucción Penal Militar DEVAL sumario con radicado No. 077, en el que cursa proceso en contra del Intendente JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA que se encuentra en la etapa de instrucción aun, por la muerte del Subintendente FERNEY CRUZ LARA. El oficio de solicitud puede ser enviado a la Calle 14 No. 29A-01, Barrio Popular de Tuluá Valle, y ubicado en el interior del Comando de Policía de Tuluá.

Para que estas dos oficinas judiciales, alleguen como prueba trasladada al proceso, copias AUTENTICAS de la totalidad de cada expediente, con radicaciones No. P-DEVAL-2013-267 y Sumario No. 077, para que sea valorada la responsabilidad Civil y Administrativa de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA y POLICÍA NACIONAL, de los daños Morales, Materiales y Daño a la Vida de Relación ocasionados a los demandantes; que den claridad a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos objeto de demanda.

2.3. INTERROGATORIO DE PARTE

2.3.1. INTENDENTE JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA. C.C. No. 11.685.103

2.3.2. SUBINTENDENTE HELBER RUIZ ARCINIEGAS C.C. No. 5.995.412.

Con todo respeto solicito al señor Juez Administrativo, cite y escuche a **INTERROGATORIO DE PARTE** bajo la gravedad de juramento a los señores antes nombrados, para que expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos objeto de demanda, a fin que absuelvan interrogatorio a instancia de parte que le formulara de manera oral o por escrito.

De igual manera, se solicita que sean notificados del requerimiento a través y responsabilidad del señor Coronel VYRON FERNANDO CASTILLO VALENCIA Comandante Seccional de Transito, o quien haga sus veces, en la Carrera 32 con Calle 47 esquina Barrio Estonia de Palmira Valle, teniendo en cuenta que estas unidades policiales pueden ser trasladados, de acuerdo a las necesidades del servicio.

2.4. OFICIAR

A la Dirección General de la Policía Nacional, para que aporte al expediente la hoja de vida INCLUIDOS el Certificado de IDONEIDAD de Instructor y de CONDUCTA del Subintendente **HELBER RUIZ ARCINIEGAS C.C. No. 5.995.412** como instructor en el entrenamiento de capacitación e instrucción en el manejo de armas de fuego de dotación oficial en la institución; la hoja de vida INCLUIDO el certificado de CONDUCTA del Intendente **JORGE ARTURO GARCIA VALENCIA. C.C. No. 11.685.103** a la Carrera 59 No. 26-21, Teléfonos 3159111 y 3159112 de Bogotá D.C.

2.5. OFICIAR

A la Clínica de Urgencias Médicas SAS, para que aporte al expediente la Historia Clínica incluida la Epicrisis del Subintendente FERNEY CRUZ LARA, toda vez, que fue allí donde inicialmente fue atendido, en esta institución hospitalaria; dirigida a la dirección calle 4 No. 22-10 teléfonos 2282246 y 2373000, de Buga Valle Del Cauca.

2.6. OFICIAR

Al Hospital San José de Buga, para que aporte al expediente la Historia Clínica incluida la Epicrisis del Subintendente FERNEY CRUZ LARA, toda vez que fue en esa institución hospitalaria donde fue atendido ante la remisión realizada por la clínica de Urgencias Médicas SAS, a la dirección carrera 8 No. 17-52 teléfono 2361000, de Buga Valle Del Cauca.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:

Se reclaman en el presente proceso el pago de los perjuicios Morales, Materiales y daño a la Vida de Relación, por la muerte que injustamente se le ocasionaron al señor FERNEY CRUZ LARA a favor de éstos sus hijos TANIA MICHELL CRUZ FANDIÑO y FERNEY SANTIAGO CRUZ CANIZALES, su señora madre CARMEN ELENA LARA DE CRUZ, sus hermanos los señores MARIELA CRUZ LARA, GABRIEL HUMBERTO CRUZ LARA, SAIDA VIVIANA CRUZ LARA, JOSE ARNULFO CRUZ LARA, su padre ARNULFO CRUZ, su Esposa la señora SANDRA CANIZALES OLAVE, su Abuela la señora LILIA LARA DE RIVERA, sus Tías las señoras BLANCA LILIA RIVERA LARA, JAIDI RIVERA, MARIA CRISTINA RIVERA LARA, sus Sobrinos los Jóvenes DIEGO ANDRES CRUZ BARRERO, LAURA SOFIA CRUZ BARRERO, CAMILO ANDRES CRUZ ROMERO, IVAN MAURICIO CRUZ ROMERO, CRISTIAN FELIPE CRUZ BARRERO, donde la pretensión mayor como lo dispone el Código Contencioso Administrativo corresponde a los **PERJUICIOS MORALES** que se solicitan ascienden a **DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EQUIVALENTES A CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$589.500X200=\$117.900.000) \$117.900.000 Mcte.**

COMPETENCIA.

Es competente el Honorable Juez Contencioso Administrativo de Cali, para conocer de este proceso en primera instancia por la naturaleza de la acción, por razón del territorio en donde se produjo la falla del servicio, (Valle Del Cauca), así como por la cuantía que se deriva de la mayor pretensión que asciende al momento de presentación de la demanda a la suma **DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EQUIVALENTES A CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$589.500X200=\$117.900.000) \$117.900.000 Mcte.**

ANEXOS:

- 1.- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- 2.- Copia de la Demanda con sus anexos
- 3.- Actas y Constancia de Conciliación fracasada, ante la Procuraduría No. 166 Judicial II de Cali de Noviembre 11 de 2014
- 4.- Poderes a mí conferidos para actuar en representación de los Actores.
- 5.- CD en PDF de la demanda.

LA ACCIÓN

La Acción incoada es la de Reparación Directa, consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PROCEDIMIENTO

El proceso habrá de rituarse por el procedimiento ordinario, indicado en los artículos 206 y ss., del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto E-2304 de 1989.

NOTIFICACIONES:

Mis representados, por conducto de su Apoderado, en la Carrera 5 N° 12-16 Oficina 408, Tel. 3975644, 3104002537, Edificio Suramericana de Cali Valle.
luiscalderonmendoza@gmail.com

El señor Representante Legal de la entidad Estatal NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA en la MINISTERIO DE DEFENSA carrera 54 N° 26-25, TEL. 3150111 CAN Bogotá D.C.

La POLICÍA NACIONAL – Carrera 59 N° 26 -21 CAN Bogotá o en Cali en la Carrera 3N N° 24N-16 Edificio Piloto, Unidad de Defensa Judicial, Barrio Piloto Cali.

El suscrito Apoderado, en la Carrera 5 N° 12-16 Oficina 408, Telf. 3975644, 3104002537, Edificio Suramericana de Cali Valle.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Calle 70 No 4-60,
notificacionesdemandas@defensajuridica.gov.co Teléfono 2558955 ext. 430, 406, 407, y 409. Bogotá D.C.

Del señor Juez,

Atentamente,

LUIS ALFONSO CALDERÓN MENDOZA
C. C. N° 11.301.880 de Girardot (Cundinamarca)
T. P. No. 147609 del C. S. J.

